



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante:	EDILMA ROSA OSORIO TAMAYO
Interviniente ad excludendum:	MIGUEL ÁNGEL LAYOS
Demandada:	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS -COLFONDOS S.A.
Llamada en garantía:	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
Radicado:	05001 31 05 006 2016 01231 01
Sentencia:	S-080

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por el interviniente ad excludendum, la AFP demandada y la llamada en garantía, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el día 27 de febrero de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

EDILMA ROSA OSORIO TAMAYO demandó a la AFP COLFONDOS S.A., para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo JAIR DIVER LAYOS OSORIO, los intereses moratorios o en subsidio la indexación, las costas y agencias en derecho.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus pretensiones, que su hijo JAIR DIVER falleció el 31 de marzo de 2014, quien era soltero y sin hijos. Que estaba afiliado a la AFP COLFONDOS S.A. donde reportó un total de 228.86 semanas de cotización, 65 de las cuales, fueron cotizadas en los últimos tres años anteriores a la muerte. Que el padre de JAIR DIVER es el señor MIGUEL ÁNGEL LAYOS, persona de la que se encuentra separada de cuerpos y de bienes, y con el que procreó 5 hijos; agrega que convivió durante toda su vida en el Barrio San Javier con su hijo JAIR DIVER, quien era el encargado de su sostenimiento económico desde hacía 13 años -antes de su deceso-. Indica que es desplazada del Municipio de Frontino; para el momento del deceso de su hijo contaba con 65 años de edad, era ama de casa, no laboraba, no era pensionada ni percibía salario con el cual pudiera garantizar su congrua subsistencia; su hijo siempre fue el soporte económico, toda vez que no contaba con la ayuda del padre MIGUEL ÁNGEL. Era beneficiaria en salud del causante en la EPS Salud total.

Que solicitó a COLFONDOS S.A. el pago de la pensión de sobrevivientes en el mes de septiembre de 2015 por la muerte de su hijo JAIR DIVER, y mediante comunicación del 20 de octubre de 2014 la AFP le indicó que no procedía el reconocimiento de la prestación solicitada, en tanto después de adelantar el estudio correspondiente se determinó que no dependía económicamente de éste.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLFONDOS S.A. acepta lo relacionado con la fecha de nacimiento y deceso del señor JAIR DIVER y la data de la reclamación administrativa de la pensión de sobrevivientes; no le consta la dependencia económica de la demandante con el causante, por cuanto según la investigación administrativa que fue adelantada por la aseguradora MAPFRE, se estableció que la demandante, no dependía económicamente de su hijo fallecido, quien le proporcionaba un apoyo esporádico, conforme a sus propias palabras. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa, buena fe, innominada o genérica, pago y compensación, prescripción, petición antes de tiempo, imposibilidad de imponer pago de intereses moratorios, imposibilidad de imponer pago de indexación y demás condenas accesorias.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

COLFONDOS S.A. llamó en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. basada en que dicha aseguradora expidió una póliza previsional de seguro colectivo de invalidez y sobrevivientes mediante la cual amparó a los afiliados de COLFONDOS S.A., para obtener la suma adicional del pago que se requiera para completar el capital necesario para las prestaciones reclamadas; que a la muerte del señor JAIR DIVER, al 31 de marzo de 2014, la mencionada póliza estaba vigente; la señora EDILMA ROSA solicita a COLFONDOS S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, razón por la cual, correspondería, de ser del caso, a la aseguradora pagar la suma adicional necesaria.

INTERVENCIÓN DE LA LLAMADA EN GARANTÍA MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. FRENTE A LA DEMANDA

Al intervenir respecto de la demanda, la aseguradora MAPFRE dijo que no le constan ninguno de los hechos, ya que no tienen relación con esa sociedad por lo que deberán ser probados. Se opone a las

pretensiones de la demanda hasta tanto se comprueben los elementos fácticos que permitan sustentar el derecho pensional, lo que no resulta posible porque en la investigación administrativa se estableció que no había dependencia económica tal y como lo exige la ley. Como excepciones de fondo propuso, ausencia de requisitos para la pensión (no dependencia económica), improcedencia de los intereses moratorios, temeridad en la acción judicial, prescripción.

CONTESTACIÓN DE MAPFRE COLOMBIA S.A. AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

Frente al llamamiento en garantía MAPFRE S.A. aceptó que se suscribió una póliza previsional de seguro colectivo de invalidez y sobrevivientes mediante la cual se amparó a los afiliados de COLFONDOS S.A. para obtener la suma adicional del pago que se requiera para completar el capital necesario para la prestación. Como excepciones al llamamiento propuso, cláusulas que rigen el contrato de seguro, ausencia de cobertura por el no lleno de requisitos legales de la parte demandante.

INTERVENCIÓN DEL VINCULADO COMO AD EXCLUDENDUM

MIGUEL ÁNGEL LAYOS se pronunció en el proceso pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo JAIR DIVER a partir del 31 de marzo de 2014, los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas.

Exponen como fundamento de sus pretensiones que su hijo JAIR DIVER falleció el 31 de marzo de 2014, se encontraba afiliado al fondo de pensiones y cesantías COLFONDOS S.A., solicitó la pensión de sobrevivientes ante dicha administradora, prestación que le fue negada por cuanto no existía dependencia económica con el causante.

Manifiesta que dependía económicamente de su hijo, toda vez que no laboraba y no tenía ningún ingreso, él le brindaba la alimentación, el transporte, el vestuario, la vivienda y todo lo necesario para su subsistencia; sostiene que era beneficiario de su hijo en la EPS SALUD TOTAL.

CONTESTACIÓN DE COLFONDOS S.A. AL INTERVINIENTE AD EXCLUDENDUM

Al contestar, COLFONDOS S.A. acepta lo relacionado con la fecha de nacimiento y deceso del señor JAIR DIVER, no le constan los demás hechos toda vez que el interviniente nunca ha solicitado ante COLFONDOS S.A. pensión por dependencia económica. Excepcionó inexistencia de la obligación, falta de causa, buena fe, innominada o genérica, pago y compensación, prescripción, petición antes de tiempo, imposibilidad de imponer pago de intereses moratorios.

COLFONDOS S.A. **llamó en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.** con respecto a lo pretendido por el señor **MIGUEL ÁNGEL LAYOS**, en los mismos términos descritos en acápites anteriores.

La señora EDILMA ROSA no se pronunció acerca de la intervención ad excludendum señor MIGUEL ÁNGEL LAYOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 27 de febrero de 2020, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ a COLFONDOS S.A. a reconocer y pagar a la demandante EDILMA ROSA OSORIO TAMAYO la pensión de sobrevivientes en calidad de madre supérstite, a partir del 31 de marzo de 2014, ordenando el pago de un retroactivo pensional de \$55.767.033 causado hasta el 29 de febrero de 2020, y a continuar pagando una mesada equivalente al SMLMV, con 13

mesadas al año, así como la indexación de las condenas desde la fecha de la solicitud hasta que se cumpla con el pago. CONDENÓ en costas a la AFP COLFONDOS S.A. y a favor de la demandante por valor de \$3.500.000. ABSOLVIÓ a COLFONDOS S.A. del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y NEGÓ la pretensión al señor MIGUEL ÁNGEL LAYOS, a quien condenó en costas a favor de la AFP COLFONDOS S.A. por la suma de \$950.000.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

El interviniente ad excludendum solicita que se revoque la decisión y se disponga que sí logró acreditar que dependía económicamente de su hijo JAIR DIVER LAYOS OSORIO, por tanto, es beneficiario de la pensión de sobrevivientes junto con la señora EDILMA ROSA OSORIO. Considera que en primera instancia se hizo una indebida valoración de los elementos materiales probatorios, por determinar que las ayudas que le brindaba el causante a su padre eran esporádicas, indicando que este así lo había confesado en el interrogatorio de parte, situación que resulta alejada de la realidad dado que, el señor Miguel Ángel fue enfático en decir que las ayudas económicas se destinaban a vivienda y alimentación, en una periodicidad de cada quince días. Igualmente, estima que deben valorar en debida forma los testigos, quienes acreditaron que la ayuda era permanente, le permitía solventar todos y cada uno de sus gastos y que la situación económica desmejoró después del fallecimiento de su hijo. Respecto de la prueba consistente en la certificación, que al despacho le merece sospecha, el documento no fue tachado de falso en el expediente, por lo tanto, se demuestra que en efecto el causante tuvo como beneficiario a su padre, lo que da cuenta que este dependía económicamente de su hijo, inclusive desde el año 2008 fecha en que fue beneficiario de su hijo en el Sistema de Seguridad Social en Salud y hasta el deceso.

MAPFRE, a su vez, argumenta que no se presenta dependencia económica; insiste que en la investigación realizada en agosto de

2015 por la empresa CRONOS, contratada por MAPFRE, claramente se establece cuáles eran los gastos antes del fallecimiento de Jair Diver y cuál era la proporción que aportaba. De igual manera, quedó establecido que el causante estaba desempleado desde julio de 2012 por retiro voluntario (folio 234), y que los gastos mensuales de la familia para cuando este fallecía ascendían a \$745.000, de los cuales \$150 eran aportados por el fallecido, es decir, el 20%. (folio 235). La mayor proporción de los gastos era asumida por ÁNGELA MARÍA LAYOS, quien manifiesta que colaboraba con un monto de \$200.000 y la señora EDILMA ROSA OSORIO, quien declara que aportaba la suma de \$395.000. Igualmente, se establece que la demandante tiene ingresos por su trabajo como modista, adicionalmente recibe un subsidio por parte del Estado, que cuando le preguntan si dependía económicamente del afiliado al momento del fallecimiento, manifiesta: *"El colaboraba suministrando la casa, ya que era de él y con lo que pudiera conseguir pagaba los servicios"* (folio 239).

Si bien el formulario no fue diligenciado por la señora EDILMA ROSA OSORIO, sí lo hizo su hija ÁNGELA MARÍA LAYOS quien estuvo presente. En la parte final, fue firmado por la Edilma Rosa, quien, en audiencia, acepta y reconoce la firma que allí se encuentra. Por lo tanto, hasta que dicho documento no sea desvirtuado, no se logre probar lo contrario, además de que no fue tachado de falso, goza de toda credibilidad.

La calidad de beneficiario atiende al momento del fallecimiento, esto es, para el año 2014, momento en el cual el fallecido estaba desempleado desde hacía dos años, y por tanto no existe ninguna coherencia al momento de señalar que la demandante dependía económicamente del fallecido. La CSJ, ha ratificado que, si bien no se exige una carencia absoluta para sobrevivir, lo cierto es que la persona para acceder al beneficio sí debe estar en tal situación que no pueda auto sostenerse, por lo que asumir un total del 20% de los

gastos totales de una familia, siendo la persona que menos aporta, no constituye ninguna amenaza a los derechos de la demandante.

COLFONDOS, sustenta la impugnación en el art. 74 de la ley 100, con su respectiva modificación, y la sentencia C-111/06, determina que es necesario que la parte actora haya demostrado cuál era la dependencia económica que tenía con su hijo. Sin embargo, el despacho desconoce la investigación realizada por MAPFRE, la cual no fue tachada de falsa y claramente señala cuáles son las circunstancias por las cuales se niega el reconocimiento de la pensión. Manifestó la demandante que, a partir del fallecimiento de su hijo, los medios para su subsistencia han sido brindados "*con mi trabajo y con lo que mi hija me ayuda*", que viven en la misma casa y con su nieto, además, el lugar donde viven era propio, tenían otro apartamento donde vivía el otro hijo. Que el despacho desconoce la investigación de MAPFRE con el argumento de que, en el interrogatorio de parte, la demandante manifestó no acordarse del mismo. En el proceso no se demuestra que la demandante esté sin conciencia o sea interdicto, o tenga alguna discapacidad mental que no le haya permitido de manera suficiente entender ese documento, aunque se presenta una historia clínica psicológica, en ningún momento se demuestra una ausencia de memoria. Igualmente, si bien es cierto la demandante fue desplazada, esto tampoco es una prueba suficiente para demostrar la dependencia económica.

Frente a los testigos, no prueban cuál es la dependencia económica, no manifiestan cuáles eran los gastos del hogar, o cuál era el aporte que se realizaba. En la casa también vivían otras personas que generan un mayor gasto y que como está en la investigación, había un aporte mayor de parte de la hija. Tampoco se prueba cuánto ganaba el causante como ingreso ocasional o esporádico que le permitiera ser la persona de la cual dependía la demandante.

No es coherente no condenar a Colfondos al pago de los intereses moratorios arguyendo que no se acceden a ellos porque la investigación administrativa daba a entender que no dependían económicamente, pero sí condenar en costas; es la demandante quien genera el proceso con sus argumentos incoherentes, por tal motivo tampoco está de acuerdo con la indexación del retroactivo pensional.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, MAPFRE S.A. presentó alegatos de conclusión en esta instancia ratificándose en los argumentos presentados a través del recurso de apelación, cuyo objetivo principal es obtener la revocatoria de la sentencia de primera instancia por considerar que dentro del proceso no quedó demostrada la dependencia económica de la demandante con respecto a su hijo fallecido, pues cuenta con los recursos económicos para solventar sus gastos y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. Insiste en que la A quo no tuvo en cuenta el informe presentado con la investigación adelantada por esa aseguradora, teniendo en cuenta las manifestaciones de la demandante de no recordar la información suministrada por el investigador, aún cuando en el interrogatorio adujo conocer el documento de investigación. Precisa que, al momento del deceso del JAIR DIVER no se demostró que estuviese laborando, puesto que según las pruebas del proceso desde hacía aproximadamente dos años se encontraba desempleado.

Por su parte, la apoderada de la AFP COLFONDOS S.A. se pronunció remitiéndose a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, reiterando la falta de dependencia económica de la demandante respecto del fallecido, por cuanto aquél no contaba con un empleo que le permitiera obtener recursos propios, estables, permanentes y suficientes. Con respecto al señor MIGUEL ÁNGEL LAYOS solicita se confirma la sentencia absolutoria de la prestación.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a la sustentación dada en los recursos de apelación presentados por las sociedades demandadas, así como por el interviniente ad excludendum, el punto a dilucidar en esta instancia concierne a la pretensión de la señora EDILMA ROSA OSORIO TAMAYO -demandante principal- y el señor MIGUEL ÁNGEL LAYOS -vinculado como interviniente ad excludendum-, relativa al pago de la pensión de sobrevivientes originada en la muerte de su hijo, JAIR DIVER LAYOS OSORIO, ocurrida el 31 de marzo de 2014, y en particular, en lo concerniente al cumplimiento del requisito de la dependencia económica de aquellos con respecto a éste.

Dependencia económica que debe examinarse al momento del deceso, atendiendo a que es ello requisito necesario para el surgimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, literal d), según el cual, a falta de cónyuge, compañero (a) permanente del causante, tendrán derecho a dicha prestación los padres si dependían económicamente de aquel.

Será entonces el requisito de la dependencia económica el asunto principal que deberá analizarse, pues con respecto a la señora EDILMA ROSA, la AFP COLFONDOS S.A. se basó en la ausencia de tal situación para denegarle la solicitud administrativa, así como para interponer y sustentar los recursos de apelación que aquí se deciden presentados por las codemandadas; y con relación al señor MIGUEL ÁNGEL, dicha prestación le fue negada por la Juez a quo por cuanto no acreditó dicho requisito, motivo por el cual, asimismo, interpuso el recurso de apelación. Frente a hechos tales como la calidad de padres, y el número de semanas de cotización, nada se discute en tanto han quedado plenamente acreditados.

Vistas así las cosas, es menester que tanto la parte actora como el vinculado a título de interviniente ad excludendum, quienes reclaman separadamente el derecho a la pensión de sobrevivientes, acrediten en el proceso que cuando su hijo falleció era él quien los sostenía económicamente, o al menos, que les proveía una contribución pecuniaria determinante para proporcionarles un sostenimiento digno y congruo, entendido como aquel que habilita al beneficiario para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social, acogiendo la definición que respecto al concepto de los alimentos congruos trae el artículo 413 del Código Civil.

A propósito de lo anterior, la jurisprudencia laboral ha interpretado la noción general de la dependencia económica, en cuanto que no se descarta que los padres pudieran recibir un ingreso adicional, fruto de su propio trabajo o actividad, o tener incluso un patrimonio propio, siempre que esto no los convierta en autosuficientes desde el punto de vista económico.

Se ha explicado insistentemente, que la noción de la dependencia económica contiene un alcance relativo, en tanto debe analizarse en cada caso específico si la contribución del causante para con sus ascendientes, en caso de darse, era o no determinante para la conservación y sostenimiento de sus condiciones habituales de vida, aun con la anterior advertencia en punto a que no es menester que tal dependencia deba ser total y absoluta. Lo importante en todo caso es que esa ayuda sea cierta y no presunta; que sea periódica y no ocasional; y que sea significativa respecto del total de ingresos de los beneficiarios de manera que constituyan un verdadero soporte económico y no una simple contribución, simbólica si se quiere, a los gastos del hogar.

Así lo ha explicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en múltiples providencias como la SL 14923 de 2014, la SL14539 de 2016, la SL 14096 de 2017, la SL 3425 del 9 de agosto

de 2018, la SL 2877 del 24 de julio de 2019, o más recientemente la SL 650 del 19 de febrero de 2020. En la primera de ellas indicó expresamente que:

“...la dependencia económica requerida por la ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: i) debe ser cierta y no presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres; ii) la participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario; iii) las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.”

Así las cosas, lo pertinente es examinar el material probatorio para determinar si la demandante EDILMA ROSA y/o el interviniente MIGUEL ÁNGEL, cumplen o no con el presupuesto de la prueba en torno a la dependencia económica respecto de su hijo fallecido, atendiendo a que, se reitera, en ellos se cimienta la discusión. Por lo tanto, se analizará;

1. El caso de la señora EDILMA ROSA OSORIO TAMAYO
demandante principal.

En este sentido, lo primero por advertir es que, atendiendo a lo discutido en la impugnación por la AFP COLFONDOS S.A. y la Aseguradora MAPFRE S.A., ciertamente existe una decisión de la

administradora de pensiones mencionada en la que se niega el derecho pensional reclamado por la demandante, al concluirse, con base en el informe investigativo previo realizado por MAPFRE S.A. en virtud de la póliza de seguros suscrita con la AFP, obrante de folios 228 a 239, que conforme a lo manifestado por la reclamante, *“no dependía económicamente de su hijo al momento del fallecimiento”, por cuanto este: “... colaboraba suministrando la casa ya que era de él y con lo que pudiera conseguir pagaba los servicios”*. Y frente a la pregunta relacionada con el motivo por el cuál ella no dependía del fallecido, la misma respondió: *“Porque yo tengo mi propio trabajo y él estaba sin trabajo”*.

Sin embargo, para la Sala, con arreglo al conjunto de las pruebas recaudadas en el proceso y de acuerdo al contexto en el que se desarrollaba la vida del causante y su núcleo familiar, la realidad de la situación da cuenta de que lo aportado económicamente por el señor JAIR DIVER era determinante para la conservación de las condiciones habituales de vida de la señora EDILMA ROSA OSORIO TAMAYO, puesto que, como se explicará más adelante, el causante en los últimos dos años de su vida, si bien no tuvo vínculo laboral con algún empleador del cual derivara un salario periódico, si realizó labores independientes relacionadas con la instalación de cámaras de seguridad.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la 32.166 del 10 de junio de 2008 ha indicado que la investigación pre judicial que realizan las entidades Administradoras y/o las aseguradoras tiene cabida dentro del proceso no como un documento de carácter vinculante sino como un medio probatorio más del conjunto aportado al plenario, que ha de examinarse de consuno con los restantes medios de convicción, mucho menos serán vinculantes las declaraciones que sirven de base al informe de investigación, en cuyo caso no puede considerarse que se trate de afirmaciones de una claridad tal con las que se pueda considerar

necesariamente que la reclamante no dependía económicamente del afiliado. Dijo la Corte Suprema de Justicia en esa oportunidad:

“La referida indagación administrativa practicada por el Seguro Social, vincula a este organismo para reconocer o negar la prestación deprecada, pero no sucede lo mismo frente a los jueces en el interior de un proceso laboral, pues éstos en conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, deben decidir los asuntos puestos a su consideración fundados en todas las pruebas allegadas en tiempo.

Expresado en otros términos, la simple investigación administrativa (...), es una actuación administrativa que, como tal, es un elemento de convicción más y que, desde luego, no produce efectos de cosa juzgada sobre la cuestión debatida.”

Igualmente, es válido extractar en lo pertinente lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia radicada SL2600-2018, respecto a la valoración de la prueba y a la libre formación del convencimiento del juez, en un asunto que, aunque analizaba un problema jurídico diferente al que aquí se plantea, puede aplicarse en cualquier escenario relativo. Indicó dicha Corporación:

“(...) Cabe resaltar que la prueba testimonial apreciada, no solo era abundante cuantitativamente, sino que también cualitativamente contribuyó a formar el convencimiento del juez plural, quien encontró en la coherencia y univocidad de las afirmaciones de los declarantes la verdad real de lo ocurrido. Por tal razón, el juzgador bien podía asignar un especial valor y fuerza demostrativa a ese medio de persuasión y oponerlo a lo consignado en el certificado laboral.

“Es oportuno recordar que con ocasión de lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los jueces de instancia gozan de la facultad de apreciar libremente los medios de convicción para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos, con

fundamento en los medios probatorios que más los induzcan a hallar la verdad. En esta dirección y a menos que sus apreciaciones se alejen de la lógica de lo razonable o atenten marcadamente contra la evidencia, el tribunal de casación no puede invadir el espacio de apreciación asignado a los juzgadores, ya que, de hacerlo, se viola su ámbito de libertad legal.

De tal suerte que si en el caso de marras el Tribunal, evocando argumentos plausibles, halló en la prueba testimonial un poder de convencimiento sobre lo ocurrido en relación con la contratación del demandante, que, a la larga, dejó sin mérito lo consignado en los certificados laborales de folios 17 y 18, mal haría la Corte en contraponer en casación su propio criterio valorativo, pues, recuérdese, el error de hecho en el recurso extraordinario deriva de juicios probatorios contraevidentes, groseros o irreflexivos.”

En este orden, el material probatorio recaudado en el proceso permite colegir, de manera general, la siguiente situación fáctica relacionada con el punto en discordia: **i)** JAIR DIVER LAYOS OSORIO nació el 15 de enero de 1981 y murió el 31 de marzo de 2014, es decir, a los 33 años de edad; **ii)** comenzó a aportar al sistema de pensiones en el mes de febrero de 2008 como trabajador dependiente, y lo hizo hasta el mes de julio de 2012; **iii)** la demandante estuvo casada con el Sr. MIGUEL ÁNGEL LAYOS, pero se separaron de hecho desde cuando el causante tenía aproximadamente cinco años de edad; **iv)** el causante siempre vivió con su madre EDILMA ROSA, hasta el momento del deceso, en un inmueble de su propiedad (de JAIR) ubicado en el barrio Antonio Nariño – Comuna 13 de Medellín – junto con un nieto de la demandante de nombre KEVIN, quien ha tenido, según declaraciones de parte y de terceros, graves problemas visuales; **v)** la señora EDILMA ROSA ha ejercido como costurera desde su propia residencia, en arreglos menores de modistería; **vi)** JAIR DIVER laboró como celador en empresas de vigilancia privada hasta el mes de julio de 2012, devengando un poco más del salario mínimo legal de la época, conforme a la historia laboral allegada al expediente, **vii)** la

demandante ha recibido una ayuda económica estatal como adulto mayor, de aproximadamente \$150.000 cada dos meses, además de un ingreso por el arriendo de otro apartamento en cuantía de \$140.000 o \$150.000/mes; **viii)** los gastos generales del hogar de la demandante EDILMA ROSA correspondían, básicamente, a necesidades alimentarias, servicios públicos, conectividad a internet, recreación, compra de droga no suministrada por el SISBEN (Sistema al cual se hallaba adscrita la demandante) además de los gastos que demandara la atención médica de su nieto KEVIN especialmente, relacionadas con un trasplante de córnea que éste requirió a través de varias cirugías.

En lo que tiene que ver con las declaraciones rendidas en audiencia, se cuenta con los interrogatorios de parte practicados tanto a la demandante como al interviniente, así como los testimonios rendidos por MARIA EDELMIRA ALZATE OROZCO y JAIME ALBERTO ARIAS TAMAYO – traídos a instancia de la parte demandante - y FRANCISCO ANTONIO GOEZ RESTREPO y RODRIGO ALFONSO OSORIO BERRIO – por parte del interviniente ad excludendum - quienes ofrecieron sus declaraciones que puede calificarse como circunstanciadas, claras y sin aparente tendencia de encaminarse necesariamente a favorecer de manera sesgada los intereses de la parte actora, en este caso.

A este respecto, no sobra advertir que no siempre cabe exigir unanimismo en las versiones de los testigos, pues, por el contrario, tal condición podría suponer un motivo de duda en cuanto a la espontaneidad del testimonio, y resultan entendibles y aún razonables, que se observen diferencias entre los mismos fruto de la percepción subjetiva y particular que cada uno de ellos tienen de la realidad, siempre que tales diferencias no desquicien en materia grave la convicción del juzgador.

En el contexto del proceso, cabe destacar, del interrogatorio de parte absuelto por la actora, su postura reiterativa en cuanto que, si bien

admite que recibió la visita de un investigador que le hizo diversas preguntas, dice no recordar los detalles de las mismas, ni las respuestas que ella dio; pero igualmente se resalta que en la misma diligencia – el interrogatorio de parte – manifestó que el grupo familiar fue desplazado por la violencia del municipio de Frontino, que en ese entonces le daban *unas platas*, pero que cuando esto cesó, ya su hijo JAIR DIVER empezó a trabajar y se hizo cargo de la obligación. Insiste en que éste se encargaba de pagar el mercado y los servicios. En cuanto al subsidio del Estado, acepta que lo ha recibido en la cuantía atrás mencionada, aunque precisa que no recuerda si en vida de JAIR DIVER ya lo venía recibiendo pues cree que lo percibe desde unos 3 años atrás contados desde su interrogatorio, que se efectuó en el 16 de octubre de 2019.

Lo anterior en contraste con lo que consta en la investigación pre judicial adelantada por la Aseguradora, en la cual señaló que su hijo no era el encargado de llevar los gastos del hogar, porque ella trabajaba y él estaba desempleado.

Ahora bien; de los testimonios practicados en el proceso tanto de la parte demandante como del interviniente interesado, naturalmente con la garantía del derecho de contradicción del que adolece la investigación pre judicial, se infiere que gran parte de aquellas obligaciones que asumían la demandante y su hijo JAIR DIVER estaban a cargo de este último, entre ellas el suministro de la vivienda en sí misma en su condición de propietario, los víveres y el mercado, y los servicios públicos incluyendo la internet como una necesidad moderna, más no como un mero lujo. La señora EDILMA ROSA por su parte destinaba sus ingresos económicos principalmente a la compra de la droga no suministrada por el SISBEN y en los cuidados de su nieto KEVIN.

Es admisible que los testigos de la parte demandante, MARIA EDELMIRA ALZATE OROZCO y JAIME ALBERTO ARIAS TAMAYO,

tuvieran un conocimiento directo acerca de los hechos que relataron, pues claramente se trata de personas cercanas al núcleo familiar, aquella por su condición de vecina de la demandante quien dijo conocerla desde hacía 20 años, y éste por la calidad de compañero de labores y amigo del causante, quien asimismo dijo conocer a la demandante desde hacía 31 años - en el Municipio de Frontino Antioquia - y luego en el barrio Antonio Nariño de Medellín, de modo que es entendible que conozcan de manera directa los hechos que narran.

De manera concreta, en lo que a la declarante MARÍA EDELMIRA ÁLZATE OROZCO respecta, si bien indica que conoció del oficio del causante como vigilante en empresas de seguridad, pero no sabe si laboró de manera independiente en la instalación de cámaras de seguridad, recaba en general que EDILMA ROSA hacía *trabajitos* de modistería, tales como “... remienditos, pegaba botones, pegaba cierres, hacía rueditos y arreglitos de uniforme de los niños”. Frente a la dependencia económica de la demandante con el causante dijo que veía cuando JAIR DIVER llevaba el mercado a la casa, y que además la demandante le daba el recibo de los servicios públicos, y él los pagaba, aunque no puede asegurar, dice, si doña EDILMA “... le daba *alguito para ayudar a pagar los servicios*”. Y añade: *O sea, doña Edilma le ponía los servicios encima de la mesa del comedor y él cogía los servicios y se iba con ellos ... no sé si los pagaba él de cuenta de él o de ella ... yo no vi que él le ponía platica ahí para que ella pagara los servicios, sino que él los cogía y se los llevaba.*”

Sobre la afiliación al régimen subsidiado de salud de la actora dijo la deponente: “Pues ella anteriormente estaba afiliada a una EPS que la tenía el hijo, pero ella le dijo que la sacara porque ella como era desplazada la metieron al Sisbén”, circunstancia que conocía porque consultaban en la misma institución prestadora del servicio de salud y se encontraban allí.

En similar sentido declaró el señor JAIME ALBERTO ARIAS TAMAYO, quien indicó que la actora siempre ha sido *"costurera, es decir, ella donde está le ayuda a uno, por ejemplo, si uno tiene una bota de un pantalón malo, un cierre, va, y ella la arregla, o si una camisa se le dañó, entonces va y nos la arregla, lo que uno le quiera dar o muchas veces a mí en particular... P/ ¿hacía cosas mínimas o tenía su empresita de modistería? No, siempre era mínima, no, o sea, eran arreglos"*. Sobre a cuanto ascendían esos ingresos como costurera insistió que los mismos eran mínimos.

Sobre la dependencia económica de la actora respecto de su hijo JAIR DIVER enfatizó el deponente que, *"... el que llevaba la casa era Jair Diver. P/ ¿Qué es llevar la casa? Llevar la casa es mercar, pagar servicios, parte de ropa, lo que es los paseos, porque cuando íbamos por ejemplo a algún paseo, él siempre era el que pagaba. Justificando sus afirmaciones en que: "Muchas veces él iba y mercaba, en la gran mayoría también le dejaba plata a ella para que hiciera el diario P/ ¿los servicios él le dejaba la plata a doña Edilma, como era? En muchas ocasiones, yo veía que llegaba la cuenta y siempre esperaban a Jair Diver para decirle, era una de las constantes peleas que se veían allí porque era una de las peleas de él con el hermano y con el sobrino porque él decía, pero como una cuenta tan grande y como él era el que la pagaba, entonces siempre les recriminaba eso."*

Advierte igualmente la Sala que este mismo testigo ARIAS TAMAYO refirió que el causante, luego de laborar con él como vigilante hasta julio de 2012, se dedicó a trabajar como independiente instalando cámaras de seguridad, *"...que era lo que más estaba dando en ese momento..."*; afirmaciones que considera la Sala son admisibles, por cuanto ambos tuvieron los mismos roles ocupacionales, trabajaron en las mismas empresas durante varios años; al enumerar el deponente en su declaración los empleadores para los cuáles ambos habían laborado, tales como ASOVIPA, ALVICOL y CLAVE SEGURIDAD, los

mismos coincidieron con los consignados en la historia laboral del demandante obrante en el expediente a folio 17 y 18.

Por otro lado, el testigo de la parte interviniente RODRIGO ALFONSO OSORIO BERRIO, quien indicó conocer a la demandante y al causante debido a que, aquella es su tía y JAIR DIVER era su primo, coincidió en manifestar que la actora siempre vivió con su primo fallecido; sobre los ingresos percibidos por la demandante indicó que: *"Mi tía toda la vida yo la he conocido que hace costura en la casa con una máquina que mantenía. P/ ¿Qué costura, fabrica prendas para la venta, para surtir al éxito, alguna otra empresa, o hace costuritas al vecindario? Costuritas al vecindario es lo que yo le he visto."*

En esas condiciones, bien puede concluirse que el aporte económico efectuado por JAIR DIVER al hogar que conformaba con su madre y su sobrino KEVIN, no era una simple contribución incierta, esporádica o poco significativa, sino que se trataba de una ayuda relevante para solventar las necesidades del grupo familiar en general. Se trataba de un hijo de familia que falleció a los 33 años de edad; soltero y sin hijos; que toda su vida vivió con su madre, quien, aunque ciertamente recibía algunos recursos económicos, precisaba de la ayuda de su hijo para su sostenimiento; que el causante adquirió, en vida, además de una motocicleta, la casa destinada a su propia habitación y la de su madre lo que puede entenderse como un aporte con los mismos fines.

Vale decir, haciendo el parangón con la exigencia que por jurisprudencia ha sido establecida para este tipo de situaciones, es posible concluir que se trataba de una ayuda *cierta y no presunta; periódica y no ocasional; y sin duda significativa* respecto del total de ingresos de los beneficiarios, de manera que, se repite, constituía un verdadero soporte económico y no una simple colaboración a los gastos del hogar.

De otro lado, retomando, frente al punto específico recurrido por la aseguradora y la AFP con relación a la investigación administrativa adelantada por MAPFRE, vale decir que, tal y como lo dijo la Juez A quo, estima la Sala que al momento del informe en cuestión fechado del 1º de septiembre de 2015, la señora EDILMA ROSA se encontraba en un estado de afectación psicológica, situación que se evidencia en la historia clínica obrante en el expediente (fs. 35/42) de la que se desprende que, ante una valoración psicológica realizada a la actora el 4 de diciembre de ese mismo año (esto es, posterior a la visita investigativa) le fue diagnosticada un “*PROCESO DE DUELO NO ELABORADO*”, dado que no había asimilado la rabia que le produjo el hecho de que la vida de su hijo pudo ser salvada, de no haber mediado lo que ella consideraba un acto de negligencia médica.

Circunstancia que no puede ser omitida o *deshumanizada* por el juzgador, al momento de analizar la prueba discutida. Si bien, se concede que lo anterior no constituye una prueba contundente, técnica o científica, por la cual se expliquen necesariamente las contradicciones en las respuestas de la demandante entre la investigación prejudicial y la declaración de parte, es lo cierto que, con esta disquisición o sin ella, la convicción de la Sala en cuanto a la dependencia económica que se discute, emanada del conjunto probatorio del proceso en su integridad, no sufre modificación alguna.

Enfatiza la Sala que el juez al valorar las declaraciones extrajuicio debe aplicar las reglas de la sana crítica de un modo riguroso, teniendo en cuenta que existe una menor inmediación entre el administrador de justicia y el medio de convicción. Por ello, se reitera, al realizar una lectura integral de todos los elementos probatorios allegados al proceso, así como la coherencia entre el informe administrativo y la prueba practicada en juicio, se concluye que, acorde con la realidad, la señora EDILMA ROSA dependía económicamente del causante JAIR DIVER.

En suma, la Sala infiere que se dan las condiciones para confirmar la decisión de primera instancia y en tal sentido se mantendrá la decisión en cuanto accedió al pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora EDILMA ROSA OSORIO TAMAYO.

2. El caso del señor MIGUEL ÁNGEL LAYOS interviniente ad excludendum.

Para la Sala es claro que, en este caso, conforme a la prueba testimonial practicada y a la documental obrante en el expediente, el padre del causante no dependía económicamente de su hijo JAIR DIVER. El mismo interviniente manifestó en su declaración que cuando su hijo murió, él trabajaba al servicio de la sociedad Arquitectura y Concreto recibiendo un salario mínimo. Sobre la pregunta realizada por la Juez relacionada con la dependencia económica respecto a JAIR DIVER el mismo manifestó: *"Bueno, la ayuda económica, había veces que me regalaba cincuenta, cien mil pesitos, según como él estuviera, me ayudaba. P/ ¿Cada cuánto su hijo lo visitaba? Pues él a mí no me visitaba porque para qué voy a decir que él iba al apartamento donde yo vivía, no, yo cuando empecé a trabajar pagaba un apartamentico, hasta por cierto muy caro allá en el barrio Juan veintitrés, pagaba trescientos mil pesos y él me ayudaba con lo que más podía. P/ ¿Cada cuánto le daba ayuda? Él me daba cada quince días, nos encontrábamos ahí en la esquina el huevo, en la cuarenta y cuatro con la noventa y nueve"*.

En igual sentido, declararon los testigos FRANCISCO ANTONIO GOEZ RESTREPO y RODRIGO ALFONSO OSORIO BERRIO, el primero de manifestó que: *"P/ ¿Para qué se encontraban el señor Miguel Ángel y el hijo? Pues vea, en varias oportunidades me decía que se iba a encontrar con él, que porque él como que le ayudaba con algo como que le daba pues como una, como decimos nosotros, la liga (sic) o en fin, le ayudaba a él económicamente y yo lo acompañaba". P/ ¿Como cuantas veces lo acompañó a encontrarse con el hijo? Por ahí unas tres*

o cuatro veces. (...) P/ ¿Cuánto le daba? Pues la verdad Layos me decía que le daba cien mil pesitos. P/ ¿Qué se los daba cada cuánto? Pues cada quince días le daba plata él."

Sin más, de lo anterior se evidencia, en gracia de discusión, que el aporte económico recibido por el señor MIGUEL ÁNGEL de su hijo JAIR DIVER se trataba de una simple ayuda económica, ocasional, la cual tampoco era significativa respecto del total de ingresos recibidos por el señor LAYOS, quien, se reitera, recibía un salario mínimo mensual.

Otro punto que discute la apoderada de COLFONDOS S.A., esto es, la INDEXACIÓN del retroactivo pensional reconocido a la señora EDILMA ROSA, frente al tema advierte la Sala que la indexación de las obligaciones jurídicas en general, obedece a la necesidad de acoplar un fenómeno económico como lo es la depreciación constante del dinero, con la actualización monetaria que se genera por el simple paso del tiempo; mecanismo con el cual se procura la corrección económica de los créditos demandados judicialmente, lo que comporta, antes que un tratamiento sancionatorio, que no lo es, un efecto resarcitorio o restaurativo de la moneda, en tanto no se está pagando más de lo debido, sino la misma suma causada tiempo atrás y traída al valor presente.

Hechas las anteriores precisiones, la orden de indexación del retroactivo pensional reconocido a la demandante por valor de \$55.767.033 desde la fecha de la solicitud hasta tanto se cumpla con el pago, se encuentra ajustada a derecho.

Por último, respecto a la manifestación de la apoderada de COLFONDOS S.A. sobre el valor de la CONDENA EN COSTAS, la misma se denegará por las siguientes razones; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera

o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, es decir, no es esta la oportunidad procesal en la que se discute el valor de las agencias en derecho.

De la lectura de los artículos citados, surge que, en torno a la imposición de las costas, se diferencian dos claros momentos: el primero, es aquel en el que se impone la condena en costas, esto es, se trata de ese momento en el que se determina que hay lugar a tal obligación en punto de la parte procesal que se hizo merecedora de lo propio.

La liquidación de las costas entonces, se erige en la segunda etapa que sobre el particular ha de desplegarse, o sea, es la que se materializa una vez efectuada la condena, posteriormente a ella, y en la que se entra a indicar cuál es la cantidad numeraria en que ella se concreta, momento este en el cual, se podrá entrar a rebatir, mediante recurso de reposición y apelación la fijación de las agencias en derecho, que anteriormente ya fuera efectuada; dicho en otras palabras, es en esta etapa procedimental donde se podrá disputar acerca del quantum que antes se había fijado o establecido.

En suma, la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA en todas sus partes.

Costas en ésta instancia a cargo de COLFONDOS S.A. y MAPFRE S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se tasan en la suma de \$908.526 a cada uno de ellos.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el día 27 de febrero de 2020.

Costas en ésta instancia a cargo de COLFONDOS S.A. y MAPFRE S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se tasan en la suma de \$908.526 a cada uno de ellos.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso. En constancia firman.

Los Magistrados,

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

FRANCISCO ARANGO TORRES
Salva voto

JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 73
del 30 de abril de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>



SALA LABORAL

SALVAMENTO DE VOTO

REF: ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: EDILMA ROSA OSORIO TAMAYO
DEMANDADO: COLFONDOS S.A.

RADICADO: 05001 31 05 006 2016 01231 01

Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

FRANCISCO ARANGO TORRES, magistrado de la SALA PRIMERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, presento SALVAMENTO DE VOTO en la sentencia del proceso de la referencia.

Con el acostumbrado respeto, me aparto de la decisión de la Sala mayoritaria de confirmar la sentencia de primera instancia que le otorga pensión de sobrevivientes a la demandante, pues considero que conforme a la prueba recaudadas en el proceso, en especial la testimonial, no se probó que la demandante dependiera económicamente del causante de la pensión pretendida, por las siguientes razones:

En el informe investigativo realizado por MAPFRE S.A. en virtud de la póliza de seguros suscrita con la AFP, se anota, que la demandante manifestó que: *no dependía económicamente de su hijo al momento del fallecimiento, por cuanto este: "... colaboraba suministrando la casa ya que era de él y con lo que pudiera conseguir pagaba los servicios".* Y frente a la pregunta relacionada con el motivo por el cuál ella no dependía del fallecido, la misma respondió: *"Porque yo tengo mi propio trabajo y él estaba sin trabajo".*

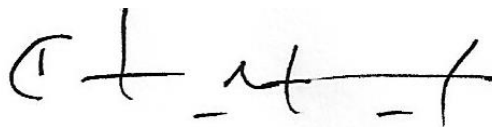
Respecto de las anteriores aseveraciones de la demandante adujo la A quo, y lo respalda la Sala que al momento del informe en cuestión fechado del 1 de septiembre de 2015, la señora EDILMA ROSA se encontraba en un estado de afectación mental o psicológica, lo que se deduce lo anotado en su historia clínica obrante en el expediente, sobre que ante una valoración psicológica realizada a la actora el 4 de diciembre de ese mismo año, posterior a la visita investigativa, le fue diagnosticada un *"PROCESO DE DUELO NO ELABORADO"*, dado que no había asimilado la rabia que le produjo el hecho de que la vida de su hijo pudo ser salvada, de no haber mediado lo que ella consideraba un acto de negligencia médica.

Así entonces la anterior conclusión, se constituye en una inferencia del Juez, "a su parecer" sin ningún respaldo en prueba científica, es decir en un dictamen pericial, que pudiera establecer, si en realidad la demandante al momento del informe aludido se encontraba en un estado mental o psicológico que no le permitía comprender lo que se le preguntaba.

El Colombia existen miles de personas que no han podido elaborar el duelo, por la pérdida de sus seres queridos, en los casos de desapariciones, u homicidios en los que no se ha podido o querido esclarecer la verdad o que existe impunidad, sin embargo, esto no permite sostener que estas personas tengan trastornos mentales o psicológicos que no les permita comprender un interrogatorio.

Ahora, la prueba testimonial con la que confronta el dicho de la demandante en la investigación administrativa tampoco es contundente para probar la dependencia económica respecto de su fallecido hijo, y la prueba documental tampoco favorece a la actora, pues nótese como el causante desde casi dos años antes de su fallecimiento no registra cotizaciones al sistema pensional, lo que no permite establecer con toda certeza que tuviera capacidad financiera para sostener económicamente a su madre y aunque uno de los testigos (JAIME ALBERTO ARIAS TAMAYO) aduce que el causante trabajaba como independiente instalando cámaras de vigilancia, esa aseveración no encuentra respaldo en la otra testigo (MARIA EDELMIRA ALZATE OROZCO), quien manifiesta haber conocido de cerca la situación de la familia, pues esta aduce que creía que el causante laboraba en vigilancia cuando en realidad desde hacía casi dos años no ejercía esta labor.

Finalmente este servidor judicial, advertido que la demandante percibe un subsidio económico del estado al que no tendría derecho si se confirma la decisión de otorgarle la pensión, en aras de proteger los recursos públicos, se ORDENA a la Auxiliar Judicial del Despacho, que si la sentencia de segunda instancia, queda ejecutoriada por no presentarse o no concederse recurso extraordinario de casación, envíe comunicación al DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, informándole sobre el reconocimiento de la pensión a la actora a efecto que tome las medidas que a su juicio considere pertinentes sobre la permanencia del pago de subsidio o la recuperación de los ya pagados. En los anteriores términos dejo salvado mi voto.



FRANCISCO ARANGO TORRES
Magistrado

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Firma Con Salvamento De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **94d0e28f56d248aa46dd52633b7ddae410aece722dd1d26184642424b0de287d**

Documento generado en 29/04/2021 10:24:58 AM